

N° 459

LA ECONOMÍA
PERUANA
EN VÍSPERAS DEL
BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA

Carlos Contreras Carranza

DOCUMENTO DE TRABAJO N° 459

LA ECONOMÍA PERUANA EN VÍSPERAS DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA

Carlos Contreras Carranza

Abril, 2018

DEPARTAMENTO
DE **ECONOMÍA**



DOCUMENTO DE TRABAJO 459
<http://doi.org/10.18800/2079-8474.0459>

La economía peruana en vísperas del bicentenario de la independencia
Documento de Trabajo 459

© Carlos Contreras Carranza (autor)

Editado e Impreso:

© Departamento de Economía – Pontificia Universidad Católica del Perú,

Av. Universitaria 1801, Lima 32 – Perú.

Teléfono: (51-1) 626-2000 anexos 4950 - 4951

econo@pucp.edu.pe

<http://departamento.pucp.edu.pe/economia/publicaciones/documentos-de-trabajo/>

Encargado de la Serie: Jorge Rojas Rojas

Departamento de Economía – Pontificia Universidad Católica del Perú,

jorge.rojas@pucp.edu.pe

Primera edición – Abril, 2018.

Tiraje: 50 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2018- 05795

ISSN 2079-8466 (Impresa)

ISSN 2079-8474 (En línea)

Se terminó de imprimir en Abril 2018.

Resumen

Presentamos una interpretación sintética de la economía peruana, desde una perspectiva histórica. Resaltamos su naturaleza dual, entre un sector de subsistencia y uno exportador, este último más pequeño demográficamente que el otro, pero más dinámico. Ambos están conectados, sin embargo, por el mercado de trabajo y algunos otros mercados que se activan esporádicamente. El Estado nutre sus finanzas, básicamente del segundo sector, por lo que tiende a favorecerlo con sus políticas e inversiones. El artículo reseña la instauración del modelo liberal en el Perú desde los años noventa y su consolidación en las décadas siguientes y explica cómo al compás del último auge exportador iniciado en la misma fecha, el Estado inició una nueva modalidad de conexión con el sector de subsistencia mediante programas sociales de transferencias de dinero condicionadas.

Palabras clave: Economía peruana, reformas liberales, historia contemporánea, dualismo económico

Código JEL: N16, O54, P49

Abstract

We present a synthetic interpretation of the Peruvian economy, from a historical perspective. We emphasize its dual nature, between an export sector, smaller demographically than the other, but more dynamic, and a subsistence one. Both are connected, however, by the labor market and some other markets that are activated sporadically. The State nurtures its finances, basically from the first sector, so it tends to favor it with its policies and investments. The article reviews the establishment of the liberal model in Peru in the 1990s and its consolidation in the following decades and explains how, in keeping with the latest export boom initiated on the same date, the State initiated a new modality of connection with the sector of subsistence through conditional cash transfer social programs.

Keywords: Peruvian economy, liberal reforms, contemporary history, economic dualism

JEL Classification: N16, O54, P49

¹ Este artículo fue publicado en alemán bajo el título “Die peruanische Wirtschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts” dentro del libro *Peru heute: Politik, Wirtschaft, Kultur*, editado por Iken Paap y Friedhelm Schmidt-Welle y publicado en el 2016 por Vervuert Verlag en Frankfurt, Alemania. En la versión que ahora publicamos he actualizado algunos datos e introducido otras pequeñas variaciones, como la del título.

La Economía Peruana en Vísperas del Bicentenario de la Independencia

Carlos Contreras Carranza

En los años recientes la economía peruana destacó en el contexto latinoamericano por su acelerado crecimiento y el logro de cierto clima favorable a la inversión, señalándose en este sentido como una de las de mejor desempeño en el último cuarto de siglo. Las opiniones más favorables destacaron el éxito de las reformas que desde los años noventa abrieron la economía al juego del mercado. No obstante, en vísperas del bicentenario de la independencia del país, reina hoy una fuerte inquietud acerca de la sostenibilidad futura de dicho crecimiento, dados los antecedentes históricos del país y la debilidad de sus instituciones sociales y políticas. En los últimos cinco años las exportaciones y la inversión mineras, que fueron el motor de la expansión desde los años noventa, dejaron de crecer o, cuando menos, mostraron altibajos, abriendo la pregunta de si será posible mantener el impulso expansivo, diversificando sus fuentes de apoyo.

Una economía dual

Como ocurre con muchas de las naciones poscoloniales, la economía del Perú se caracteriza por un cierto carácter dual. Esto quiere decir que se compone de dos sectores diferenciados, que aunque mantienen algunos puntos de contacto entre sí, operan con poblaciones, espacios, lógicas y ciclos distintos. De un lado, está el sector orientado a producir bienes para la exportación, que de ordinario se trata de materias primas de origen minero. De otro, está el sector que produce bienes para la subsistencia doméstica: alimentos, utensilios caseros, viviendas bajo la modalidad de autoconstrucción y servicios diversos vinculados a la vida cotidiana (comercio al menudeo, transporte de corta y mediana distancia, cuidados del cuerpo, atenciones familiares, etc.).

El sector exportador:

El sector exportador no se reduce estrictamente a las industrias de exportación, sino que abarca áreas como la banca, el sector comercial formal donde realiza sus compras la población urbana de ingresos altos y medios, y las empresas que prestan servicios a las industrias de exportación, incluyendo las que atienden las demandas de consumo de los empresarios, ejecutivos, empleados y trabajadores de este sector. También deberíamos incluir a las empresas dedicadas a la atención del turismo externo e interno. Abarca, además, a las empresas privadas que desde los años noventa han pactado con el Estado contratos de concesión para operar los servicios públicos de telefonía, electricidad, ferrocarriles, aeropuertos y carreteras, y, en algunas ciudades, de agua a domicilio, buena parte de las cuales son extranjeras, parcial o totalmente. En la medida que el Estado depende para sus ingresos de este sector, y que un aspecto importante de sus quehaceres se vuelca a satisfacer sus demandas, también debería ser considerado parte del mismo, aunque reconociendo la lógica diferente que guarda la economía pública.

Considerado con esa amplitud, el sector exportador abarca laboralmente a unos cinco a seis millones de los diecisiete millones de personas que componen la población económicamente activa (PEA) del país (la población total del Perú es en el momento de unos 32 millones). O sea, que incluye más o menos a un 30% de la mano de obra y a una porción similar de la población nacional. Sus espacios físicos son las áreas residenciales y de comercio formal de Lima y unas pocas grandes ciudades del país, correspondientes a las regiones en que el sector desarrolla con cierta fuerza sus actividades, tales como Trujillo, Chiclayo, Piura y Cajamarca, en el norte, y Arequipa, Moquegua y Cuzco, en el sur. De forma algo más débil, incluye áreas de las ciudades de Iquitos, Huancayo, Tarapoto, Tumbes, Huaraz y Tacna, donde discurre cierta actividad turística. También forman parte de su espacio los asentamientos mineros y las plantaciones agrarias donde se extraen o producen los bienes a ser exportados. Los primeros yacen diseminados por toda la sierra peruana, y las segundas, por la región de la costa, aunque también algunos valles de la sierra oriental o selva alta, donde compite con los cultivos de coca.

La lógica de este sector es la producción de bienes transables, aprovechando los bajos costos del suelo y la mano de obra peruana; vale decir, sacando partido de las “ventajas comparativas” del Perú en estos aspectos. Hasta hace poco más de medio siglo la tierra era barata, los campesinos que las ocupaban carecían de fuerza política, o su consentimiento podía ser comprado a relativamente bajo precio, y el Estado no imponía regulaciones ambientales que encareciesen los proyectos mineros, como en otras partes del mundo. Sin embargo, este escenario ha comenzado a cambiar en los últimos años, amenazando la rentabilidad del sector exportador.

El sector de subsistencia:

El sector de subsistencia es más variopinto, por su carácter hasta cierto punto residual; vale decir, que lo componen todos los que no forman parte del sector exportador. Viene a ser el más grande de acuerdo a la cantidad de personas que emplea, ya que corresponde a la población rural dedicada a la agricultura y ganadería de autoconsumo, así como a la población urbana que no ha podido incorporarse al mercado asalariado formal y subsiste recurriendo al comercio informal, la venta mendicante, los empleos precarios, la artesanía y diversas formas de autoempleo, que incluyen la prestación de servicios y las actividades de producción y comercialización de bienes falsificados, copias piratas de libros o música y otras formas similares. Los impuestos indirectos en el Perú son altos (por ejemplo el Impuesto General a las Ventas es de 18%, a los que, en el caso de ciertos bienes, se añaden “impuestos selectivos al consumo” todavía más elevados), lo que promueve mucha evasión, empujando a muchas personas y empresas a la informalidad.² Una parte de este sector también subsiste de las remesas de dinero enviadas desde países vecinos, como Argentina y Chile, u otros más lejanos, como Estados Unidos y España, por parientes que emigraron en años anteriores. Se calcula que existen unos tres millones de peruanos emigrados, aunque estos provienen de todos los sectores sociales.

² Algunos investigadores consideran que existiría, además, un tercer sector conformado por las actividades más abiertamente criminales y violentas, como el cultivo de coca y la comercialización de insumos para la fabricación de las drogas, el robo y los secuestros. Ver Francisco Durand, *El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva*. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República, 2007.

En la actualidad los porcentajes de la población urbana y rural en el Perú son de 75 y 25% respectivamente, pero hace medio siglo eran de 47 y 53, respectivamente, y en 1940 las proporciones eran casi inversas: un tercio para la población urbana y dos tercios para la rural.³ La rápida urbanización se hizo sobre la base de una fuerte migración interna desde el campo a las ciudades. Estas fueron hasta mediados del siglo XX espacios de residencia de las elites blancas y mestizas que dirigían la nación, más que focos productivos de bienes y servicios. No estaban preparadas para integrar a la vida económica y social urbana a los campesinos quechua hablantes que llegaban chacchando coca y orinaban en la calle, por lo que los inmigrantes quedaron física y económicamente ubicados en la periferia de las ciudades, donde debieron inventarse una economía que les permitiese la subsistencia.

Mientras la gente del sector exportador recibía educación en escuelas y colegios privados, la del sector de subsistencia lo hacía en colegios del Estado, donde las horas de clase son menores y los profesores carecían de la preparación, motivación y fiscalización que se tiene en el sector privado. Según refieren algunas investigaciones recientes, la educación pública funciona como un estigma en el mercado laboral, sobre todo de Lima.⁴ De ordinario, la educación de la población del sector de subsistencia ha sido de menos años que los del primer sector, no alcanzando en muchas ocasiones a completar el nivel considerado básico, y casi nunca el nivel superior o universitario. Frecuentemente su lengua materna no ha sido el castellano, sino alguna de las lenguas indígenas del país, como el quechua o el aymara, lo que, unido a sus pocos años de educación formal, trae como consecuencia una pobre habilidad en el manejo de la lengua franca del país, que es el idioma español o castellano.⁵ Como históricamente, y con apoyo del Estado, la gente del sector exportador ha tomado las mejores tierras y asientos minerales, y las actividades comerciales de mayor ganancia, como la del comercio externo, la lógica de esta población es la subsistencia, sin que esto excluya su búsqueda de inserción en el primer sector, lo que eventualmente llega a suceder durante las coyunturas de bonanza y crecimiento, como la que ha caracterizado a la economía peruana desde los años noventa.

Como llevamos dicho, los sectores exportadores y de subsistencia mantienen algunos puntos de contacto, por lo que no funcionan como recipientes aislados. El sector de subsistencia es un repositorio de mano de obra de poca calificación, donde el sector exportador puede reclutar mano de obra de este tipo durante sus coyunturas de expansión; el sector de subsistencia provee, también, ciertos servicios a los miembros del sector exportador, tales como los de cuidado y limpieza del hogar, incluyendo a los

³ En el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1961 los porcentajes de la población urbana y rural fueron de 47.4 y 52.6, respectivamente. En el censo más reciente hoy disponible, de 2007, dichos porcentajes fueron de 75.9 y 24.1, respectivamente. Pero ha habido varias críticas a que la metodología de considerar como urbana a todo conglomerado mayor a las cien viviendas contiguas, infla exageradamente la población urbana. Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAH) la población urbana en el año 2007 habría sido solo de 72.3%. Si considerásemos como población urbana únicamente a la residente en ciudades mayores a 50 mil habitantes, el porcentaje se reduciría a un 54%.

⁴ Ver Arlette Beltrán y Janice Seinfeld, *La trampa educativa en el Perú. Cuando la educación llega a muchos pero sirve a pocos*. Lima: Universidad del Pacífico, 2013.

⁵ Ver de Adolfo Figueroa, *La sociedad sigma: una teoría del desarrollo*. Lima: Fondo Editorial PUCP-Fondo de Cultura Económica, 2003.

niños, ancianos y automóviles, y a través del gasto público la población del sector de subsistencia se beneficia de una parte de las ganancias captadas por el Estado del sector exportador a título de impuestos. Este rubro ha tendido a crecer durante la última bonanza.

A lo largo del quinquenio 2013-2017 el valor de las exportaciones peruanas representó en promedios anuales un cuarto del total del producto interno de la nación;⁶ si añadimos los otros rubros del sector exportador, como el comercio formal y la industria de bienes de consumo que se vende a través de este comercio, más los servicios estatales y el turismo, el sector exportador debe representar no menos de las tres cuartas partes de la economía. Como emplea a solo un 30% de la PEA, se deduce que el ingreso promedio de sus integrantes es varias veces mayor al del sector de subsistencia. La economía del país está, pues, dominada por el sector exportador, al tiempo que las exportaciones históricamente han estado dominadas por la minería. Durante el quinquenio 2013-2017 el promedio de las exportaciones del rubro minería (incluyendo petróleo, gas y derivados) sobre el total exportado por el Perú fue de 65%, lo que nos da una medida de su fuerte hegemonía en el comercio exterior del país.⁷

Exportaciones, elites y Estado:

El sector exportador emplea relativamente a pocas personas; por ejemplo, el rubro de la minería brinda empleo actualmente solo a unas 200 mil personas.⁸ Pero su elevada productividad es la clave de su superioridad. Esas 200 mil personas ocupadas en la minería, que apenas representan un 1% del total de la PEA, producen el 15% del producto bruto interno (PBI). Esto se debe tanto a la sofisticada tecnología del sector, que opera con abundantes bienes de capital (maquinaria y equipos de elevado costo), cuanto a que se trata de un sector que aprovecha suculentamente las rentas de la naturaleza. Cuando los precios de los metales son altos en el mercado mundial, dichas rentas son tan elevadas, que los propios campesinos o gentes del sector de subsistencia se ponen también a trabajar las minas, casi solamente con sus manos o con un instrumental básico o artesanal, a pesar de lo cual llegan a obtener ganancias atractivas, que los arrancan del sector agropecuario o del pequeño comercio.

Desde la legendaria bonanza del guano en el siglo XIX, el sector exportador ha sido la fuente de donde se ha nutrido la elite económica y social del país. Dicha elite sufrió la

⁶ Datos tomados de la página web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Consulta hecha el 4 de abril de 2018.

⁷ Datos tomados de la página web del BCRP. Consulta hecha el 4 de abril de 2018.

⁸ Es difícil calcular el tamaño exacto del empleo brindado directamente por el sector exportador. Al final del 2012, en un momento cumbre de las exportaciones, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Luis Silva Martinot lo estimó en un millón de empleos directos, y otro tanto para el sector turismo (que incluye a los visitantes extranjeros y nacionales) (diario *Perú 21*, Lima, 31 de diciembre de 2012). Una aproximación a este dato puede ser proporcionada por la estructura del empleo por tamaño de las empresas en el Perú. Las empresas privadas con más de cien trabajadores brindan en el Perú solo el 7.1% de los empleos, mientras las que tienen entre 11 y 100 trabajadores aportan una cifra similar: 8.7%. Las micro empresas, de 2 a 10 trabajadores brindan el 22.5%. Así, el total de trabajadores asalariados por la empresa privada representó el 38.3% para el año 2016, pero en empresas con 11 o más trabajadores no llegaban al 20%. Datos tomados del *Anuario Estadístico Sectorial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2016* Lima: 2017.

competencia de las empresas extranjeras, que amenazaron desplazarla del renglón más lucrativo de la economía, pero con el paso del tiempo la elite nativa y el capital extranjero fueron encontrando un simbiótico sistema de convivencia y asociación.⁹ La elite económica y social se ha ocupado en algunas épocas directamente del gobierno de la nación, y durante otras lo ha ejercido indirectamente, pero casi siempre ha detentado la influencia suficiente para hacer que la política del gobierno favorezca el desarrollo del sector de exportación, haciendo respetar sus derechos de propiedad, aunque resignándose a hacer concesiones al sector de subsistencia cuando lo delicado de la coyuntura política lo aconsejaba.¹⁰

Parte del acuerdo entre la elite y el Estado para que este favorezca al sector exportador, fue aceptar que este se convierta en el principal asidero fiscal de la nación. Así, los gobiernos peruanos desde el siglo XIX (incluso desde antes, si rastreamos la historia del período español) básicamente han vivido de las rentas de las exportaciones. A veces estancándolas directamente (es decir: estatizando los yacimientos mineros y explotándolos a través de empresas estatales o mediante contratistas privados) o, en otras ocasiones, cobrando regalías a las empresas exportadoras por el material extraído, o impuestos por las ganancias obtenidas de su comercialización. El gobierno también ha obtenido rentas de las exportaciones indirectamente; por ejemplo, cobrando impuestos al ingreso de productos importados, cuya entrada al país es posible a raíz de las exportaciones, o a los sueldos de los trabajadores del sector.

La leyenda negra de los enclaves extranjeros en América Latina difundió la idea de que las empresas de exportación no transmitían efectos multiplicadores a la economía local. Eso fue básicamente cierto para algunos sectores como el petrolero, pero en los que nunca dejó de existir lo que podríamos llamar el “enlace fiscal” (los ingresos obtenidos por el gobierno a título de impuestos, que a través del gasto público se inyectan en la economía interna). En otros rubros de exportación del país, como la minería de la plata, el cobre, el zinc, el plomo y el oro, los efectos transmitidos a la economía local no deben desdeñarse, y en el caso de las exportaciones agrarias, tienden a ser incluso más grandes, por el mayor empleo que tradicionalmente brindan.¹¹

El sector de exportación es pues el nervio que mueve la economía peruana. Aunque directamente no ofrece muchos empleos, sí lo hace indirectamente, puesto que se constituye en un gran comprador de bienes y servicios. No todos estos pueden ser provistos localmente, por lo que deben ser importados, pero otros sí, como por ejemplo los servicios de reparación y mantenimiento de equipos y vehículos, la construcción de infraestructura civil y su mantenimiento, los servicios de asesoría legal y contable, los servicios de asesoría y relación con las poblaciones campesinas aledañas, la compra de uniformes e implementos de seguridad para los trabajadores y servicios de comedor para sus campamentos, etc. Hay un punto en el que ya es difícil discernir si los empleos

⁹ Ver Rosemary Thorp y Geoffrey Bertram, *Perú 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta*. Lima: Universidad del Pacífico, 2013; y Julio Cotler, *Clases, estado y nación en el Perú*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1978.

¹⁰ Sobre la historia política del país, ver: Peter Klarén, *Nación y sociedad en la historia del Perú*. Lima: IEP, 2003; y el más antiguo pero muy intuitivo estudio de Francois Bourricaud, *Poder y sociedad en el Perú contemporáneo*. Buenos Aires: 1967.

¹¹ Thorp y Bertram, *Perú 1890-1977. Crecimiento y políticas en una economía abierta*. Lima: Universidad del Pacífico, 2013.

corresponden al sector de exportación o al de subsistencia. Esto ocurre más frecuentemente en los años recientes, a raíz de que las empresas de exportación, dentro de su propósito de mejorar su imagen política y la opinión que se tiene de ellas entre la población más pobre, discriminan para sus compras a favor de las familias y organizaciones del sector de subsistencia.

La economía nacional se mueve en función del ritmo impuesto por el sector de exportación. Cuando este va bien, el empleo, sobre todo el formal (sujeto a cierta estabilidad y que contempla seguro de salud, ahorro forzoso para el retiro y un fondo en caso de desempleo), aumenta; en los centros comerciales de Lima y otras ciudades del interior se forman colas de clientes en las cajas de pago, el precio de las viviendas y los alquileres en las ciudades sube, las ventas de automóviles se multiplican y las ganancias de la pequeña Bolsa de Valores de Lima, crecen, puesto que sus ciclos están principalmente determinados por las acciones de las empresas mineras. Las ganancias de la Bolsa (que pueden llegar a ser espectaculares durante las coyunturas de ascenso de precios de las materias primas en el mercado mundial) transmiten optimismo a la clase empresarial, e incluso a los trabajadores, que ven como, mes a mes, su fondo de jubilación sube como la espuma.

El gráfico siguiente (gráfico 1) muestra el ciclo ascendente que han tenido las exportaciones peruanas a partir de los años noventa, así como el efecto determinante que las exportaciones mineras tuvieron sobre el curso general. El despegue fue progresivo durante los años noventa y obedeció, básicamente entonces, al cambio de las condiciones internas, que implicaron el cese de la violencia política, con el desbaratamiento de los movimientos subversivos terroristas que en los años anteriores habían conmocionado a la opinión pública y afectado la vida cotidiana de la población y las actividades económicas con las ejecuciones selectivas de autoridades y empresarios, el bloqueo de carreteras y la interrupción de los servicios de electricidad. Asimismo, la inflación se redujo a cifras normales, después de haber trepado hasta números de tres y cuatro dígitos anuales hasta 1990.



Fuente: BCRP, Página web

Para ello fueron importantes los cambios en la política económica impuestos por el gobierno del ingeniero agrario Alberto Fujimori, que más abajo reseñaremos. A partir del año 2003, con el aumento de las compras de cobre, hierro y zinc por parte de la China, y el alza vertiginosa del precio del oro, el crecimiento de las exportaciones se aceleró. En menos de veinte años, entre 1993 y 2011, se multiplicaron casi catorce veces, al pasar de 3 mil millones de dólares a 46 mil millones de la misma moneda. El gráfico deja ver también cómo el descenso de los precios de los metales en los años recientes, junto con el aumento de los conflictos sociales en las zonas mineras del país, unidos a cierta pérdida de optimismo en la clase empresarial, han estancado y aún hecho retroceder el ritmo de las exportaciones en los últimos años.

Los productos que principalmente han animado el boom exportador han sido el cobre y el oro. Otros bienes que en ciclos pasados protagonizaron fases de bonanza, como la harina de pescado, el azúcar y el algodón (todos ellos fundamentales durante el auge que siguió al final de la segunda guerra mundial), perdieron importancia, parcial o totalmente (véase cuadro 1)

Los asientos mineros más importantes son los dedicados a la producción cuprífera y aurífera. En algunos casos se trata de yacimientos explotados desde hace más de medio siglo (o más), como los de cobre de Cerro de Pasco, Morococha y Toquepala, ubicados en la zona central y sur de la sierra peruana, pero las grandes minas de oro (de donde también se extrae cobre, plata y otros metales, porque casi todos los yacimientos son polimetálicos), como las de Yanacocha en Cajamarca y Antamina en Ancash, comenzaron a ser explotados en los años noventa. Para el relanzamiento de la minería en ese momento fueron decisivas las reformas pro mercado implantadas por el gobierno de Fujimori de 1990-2000.

Cuadro 1: Principales productos peruanos de exportación en los años 2006 y 2016

<i>Productos</i>	<i>% del valor total exportado: 2006</i>	<i>% del valor total exportado: 2016</i>
Cobre	25.6	27.5
Oro	17.2	20.0
Zinc	8.5	4.0
Petróleo	7.8	4.6
Textiles	6.3	3.2
Harina de pescado	4.8	2.7
Molibdeno	3.6	0.7
Plomo	3.0	4.5
Productos químicos	2.6	3.6
Café	2.2	2.1
Legumbres	1.2	3.1
Frutas	0.6	5.8
Gas natural	0.0	1.4

Fuente: BCRP, *Memoria 2016*; pp. 202-203.

La instauración y consolidación del modelo económico neoliberal

Con el propósito de atraer nueva inversión extranjera y nativa, mejorando la confianza en el país, el gobierno de Fujimori renegoció la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y la banca extranjera, cuyo servicio había quedado en muchos casos suspendido desde la década anterior; se cerraron o devolvieron al sector privado las empresas públicas emblemáticas, que habían resultado en muchos casos de expropiaciones hechas en los años setenta al sector privado, sobre todo extranjero, y se cerró la banca de fomento creada en los años treinta para dar créditos subsidiados a los empresarios privados. Ello incluyó el cierre o la privatización de bancos, empresas de transporte aéreo, marítimo y ferroviario, empresas mineras, de cemento y productos químicos, estaciones de gasolina, cadenas de supermercados y empresas distribuidoras de alimentos. Otras empresas públicas que brindaban servicios domiciliarios a los hogares fueron privatizadas bajo el esquema de “concesiones” sujetas a renovación cada cierto número de años.

Un mecanismo importante implantado por el gobierno de los años noventa para la atracción de nuevas inversiones fueron los contratos de estabilidad tributaria. Basados en parte en la experiencia vivida, los empresarios recelaban de que si sus inversiones resultaban finalmente rentables, el gobierno les subiría los impuestos, lo que, desde luego, empeoraba el escenario de riesgos que enfrentaban. Los contratos de estabilidad tributaria eliminaban este recelo, puesto que se garantizaba a las empresas que, por un lapso que habitualmente era de veinticinco años, no se movería el esquema fiscal inicial. Como los precios internos de la mano de obra y el suelo habían descendido al compás de la severa crisis económica que entre 1987-1990 hizo retroceder el PBI en un 25%, el escenario comenzó a cobrar un mejor color para los inversionistas. La captura del máximo jerarca del grupo maoísta Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, responsable de la mayor parte de atentados terroristas en el país, en setiembre de 1992, y la popularidad que consolidó el gobierno, tanto con este logro, como con la reducción de la inflación a cifras de alrededor de un 10% (un guarismo que no se conseguía desde 1973), mejoró decisivamente el clima para la inversión.

La reducción de la inflación hizo revivir el crédito bancario, que comenzó a difundir el uso de la tarjeta de crédito, un instrumento que en el pasado había sido visto como un bien de prestigio, presente solo en manos de empresarios o personas de la clase alta. La reanimación del sector de exportación, que entre 1993 y 1997 duplicó sus ventas, brindó nuevos empleos, pero, sobre todo, transmitió la sensación de que los tiempos malos habían terminado. Desde mediados de los años noventa reapareció el crédito hipotecario, del que las personas menores de treintaicinco años solo conocían el nombre. El crédito bancario para la vivienda estimuló el sector de construcción. Deslumbrantes edificaciones como el centro comercial Jockey Plaza en la zona residencial sur de Lima, y las nuevas estaciones de gasolina montadas por las grandes empresas refinadoras de petróleo en el mundo (Shell, Mobil, Texaco, Repsol, etc.) reflejaron el optimismo que embargó a la gente del sector exportador, poniendo en marcha el círculo virtuoso del crecimiento.

El “shock” de reformas liberales de los años noventa incluyó aspectos controvertidos o costosos políticamente, como cierta desregulación del empleo, facilitando el despido de los trabajadores, así como la reducción del empleo estatal, en parte, a raíz de las propias

privatizaciones y la desaparición de las empresas públicas. Paralizados por la lucha entre el gobierno y el terrorismo y debilitados por casi veinte años de depresión económica, los sindicatos laborales fueron incapaces de detener las medidas. Aproximadamente una cuarta parte de los empleados del Estado fueron cesados (esto implicaba un número de aproximadamente doscientos cincuenta mil despedidos), recibiendo algunos incentivos que la mayor parte invirtió en automóviles o microbuses de segunda mano, con los que esperaban ganarse la vida como taxistas o micro buseros. Para permitir esto el transporte público en las ciudades fue liberalizado: pegando un cartel en el parabrisas del vehículo cualquiera podía eventualmente hacer taxi o transporte de personas en las rutas que libremente eligiese. En el momento esta medida sirvió para mejorar un sistema de transporte urbano que era claramente insuficiente, por la falta de unidades, pero en el largo plazo provocó un caos en el tráfico que veinte años después no termina de arreglarse.

La liberalización de la economía:

Los precios básicos de la economía (alimentos, alquiler de vivienda, transporte público, combustibles, tarifas de servicios domiciliarios, insumos para la construcción y tasa de interés) dejaron de ser fijados por el gobierno, con la excepción de un “salario mínimo vital” bastante reducido. El comercio de importaciones también fue liberalizado, tras décadas de protección a la industria interna. Desde los años difíciles en el mundo desarrollado, de 1919-1945, se había ido desplegando una industria liviana que producía bebidas, ropa, electrodomésticos, neumáticos y otros componentes para vehículos, pinturas, papel, e incluso ensamblaba camiones, automóviles y televisores. La avalancha de importaciones de los años noventa que siguió al repunte exportador, terminó con muchas de esas fábricas, incapaces de competir con la oferta industrial de los países asiáticos y algunos latinoamericanos.

El boom importador fue consecuencia, de un lado, de la represión de las importaciones que había ocurrido desde los años sesenta; de otro, del propio crecimiento económico, que así como eliminó algunos empleos en el Estado y en la industria doméstica, creó otros en la minería, los servicios y el sector financiero; y de una reorientación en la política cambiaria. Desde los años cincuenta se había apostado a una sobrevaluación del dólar: periódicamente el gobierno dictaba el tipo de cambio, que siempre variaba al alza. Esto se hacía respondiendo a las presiones de las empresas de exportación, a quienes convenía una moneda nacional infravalorada, puesto que así acrecían la brecha entre sus costos (pagados en moneda nacional) y sus ventas (cobradas en dólares u otras divisas internacionales).

Esta política perjudicaba a la economía del resto, puesto que encarecía el pago de la deuda externa y los bienes importados, algunos de los cuales resultaban básicos para los peruanos, por tratarse de alimentos como el trigo, la carne o la leche, que la destartalada agricultura nacional no producía en la medida suficiente. Para enfrentar este problema los gobiernos manejaban varios tipos de cambio: el dólar para importar alimentos, insumos para la industria o medicinas, valía menos que el dólar para hacer viajes de turismo o importar bienes suntuarios. La falta de control sobre las autoridades propició la corrupción, degradando este mecanismo. Quienes tenían los contactos necesarios podrían comprar dólares baratos, declarando el propósito que lo justificaba, pero que luego no era cumplido.

Los mecanismos para ayudar a los empresarios y consumidores, como la banca de fomento, que con fondos del Estado prestaba dinero con tasas que la inflación volvía negativas (es decir que el dinero que se devolvía terminaba siendo menor que el que se había recibido) y los dólares subsidiados, fueron degradados en la práctica por una extendida corrupción, pero se resistían a desaparecer por la propia defensa que de ellos hacían sus beneficiarios, a quienes el economista Hernando de Soto calificó como una “coalición mercantilista”.¹² Las reformas de los años noventa crearon el “nuevo sol”, moneda que vino a equivaler un millón de unidades de la vieja moneda: el “inti”, que en 1985 había reemplazado, a su vez, al viejo sol) y unificaron el tipo de cambio, dejando que este flotase según la oferta y la demanda, aunque controlado con intervenciones diarias del Banco Central en el mercado de cambios. Esto, junto con la atracción de inversión extranjera y el alza de las exportaciones llevó a una estabilidad del tipo de cambio, primero, y a su reducción (un hecho que no ocurría en la economía peruana desde los años de la Primera Guerra Mundial) a partir de la década del 2000.

Otra de las reformas de los años noventa incluyó el intento del Estado de desembarazarse de las pensiones de jubilación de los trabajadores. El sistema de jubilación se había creado en los años treinta sobre la base de un organismo estatal que recibía de los empleadores una cuota del sueldo de los trabajadores, a quienes se les retornaría en la forma de pensiones de retiro cuando se cumpliera la edad del cese laboral. Este fondo fue, empero, saqueado, mal manejado por los gobiernos o devorado por la crónica depreciación de la moneda nacional. Cuando, a partir de los años sesenta comenzaron a jubilarse las primeras promociones de trabajadores, todavía eran pocos en relación a la ancha base de la pirámide de los nuevos trabajadores. La población crecía en los años sesenta casi al ritmo de 3% anual, pero esta velocidad se redujo rápidamente a finales del siglo, hasta llegar al 1.3% actual. A partir de los años ochenta el gobierno debió comenzar a cubrir el déficit del Seguro Social, con una cuota que año a año comenzó a engordar.

Para atajar esta hemorragia de fondos el gobierno de Fujimori creó un sistema privado de pensiones: los bancos formaron entidades que se harían cargo de los aportes de los trabajadores, garantizándoles una pensión de jubilación cuyo monto dependería del ahorro formado por las cuotas individualizadas de cada trabajador, potenciadas por las inversiones que con ellas hubiera realizado la entidad. Estas debían competir entre sí por atraer a los trabajadores. Sin embargo, a diferencia del modelo chileno, de donde se inspiró la reforma, el sistema estatal de pensiones permaneció vigente, conviviendo en el momento ambos modelos: el público, donde el ahorro no se individualiza, y el privado. En parte, el organismo estatal de jubilación no pudo ser removido por la vigencia de un régimen privilegiado de jubilación que favorecía a ciertos trabajadores del sector público, llamado de “cédula viva”, que no podía ser asumido por las empresas privadas por su obvio desfinanciamiento. A los jubilados de este régimen se les paga el sueldo del empleado actual, y rige para los militares, los jueces, los maestros del sistema de educación pública y otros funcionarios de empresas del Estado que lograron colarse dentro de este privilegiado sistema. Tras arduo debate, en el año 2004 el Congreso logró

¹² Hernando de Soto, *El otro sendero. La revolución informal en el Perú*. Lima: El Barranco, 1986.

cerrar nuevos ingresos de trabajadores públicos a este sistema de la cédula viva, aunque permanece vigente para todos aquellos que ya lo venían gozando.

La consolidación del liberalismo:

La crisis asiática de 1998 y la caída del régimen de Fujimori en el año 2000, a raíz de escándalos de corrupción, provocó la interrupción del crecimiento económico por unos pocos años (véase gráfico 2). A partir del 2002, el crecimiento retornó. De un lado, por el tirón de la economía china; de otro, porque el nuevo presidente elegido en el 2001, Alejandro Toledo, hizo ver a los empresarios que su régimen mantendría las líneas maestras de su predecesor en cuanto a la política económica. Otro tanto ocurrió con el sucesor de Toledo en el 2006, el abogado Alan García Pérez, del partido aprista, quien continuó la política “neoliberal” introducida en los años noventa; y con Ollanta Humala en el 2011, quien una vez conquistada la presidencia, sustituyó su programa de campaña titulado “La gran transformación”, por una pragmática “Hoja de Ruta”, que mantuvo la política económica dentro de la ortodoxia liberal.



Fuente: BCRP, página web.

Los contratos de estabilidad tributaria fueron respetados, y aún se siguieron haciendo nuevos, a pesar de las críticas que recibieron por su poco respeto a la soberanía nacional (en estos contratos el Estado peruano aceptaba, por ejemplo, dirimir eventuales conflictos con las empresas en tribunales internacionales) y de la desigualdad que creaban entre empresas que gozaban de ellos y otras que no. El nuevo gobierno aprovechó la estabilidad, y aún la apreciación de que gozaba por entonces la moneda peruana, para impulsar la aparición de un sistema de crédito interno para el erario, que era mucho más seguro y relativamente novedoso en un país que tradicionalmente había financiado su déficit fiscal o sus obras públicas mediante préstamos internacionales.

A pesar de ello, la magnitud de la dolarización de la economía, una secuela de la hiperinflación de los años ochenta, es todavía importante, calculándose que un cuarto

de los créditos en el sistema bancario están fijados en dólares,¹³ lo que genera una zozobra cuando el dólar tiende al alza.

Los gobiernos de Toledo (2001-2006) y García (2006-2011) impulsaron la firma de acuerdos de libre comercio con un conjunto de países claves, dejando de lado el esquema del Acuerdo de Cartagena (suscrito en 1969) o Comunidad Andina de Naciones, cuya inoperancia para incrementar el comercio entre sus miembros se había hecho patente tras varias décadas de funcionamiento. El primero de los tratados de libre comercio (TLC) fue firmado con los Estados Unidos (EEUU), tras cierto debate en el que, quienes se opusieron a los acuerdos, señalaron el peligro del alza del precio de las medicinas y los programas informáticos, dado que los tratados incluían obligaciones de perseguir el contrabando y la producción o comercialización ilegal de productos farmacéuticos, informáticos y de discos de música o películas que no hubiesen pagado las patentes respectivas a las empresas estadounidenses. También había temores de que un comercio sin barreras entre economías tan desiguales en tamaño y productividad podría perjudicar a la más pequeña y atrasada.

El TLC con los EEUU se firmó, finalmente, el 2006 y comenzó a regir el primero de febrero de 2009. Tratados similares se firmaron con Chile (2006, pero con vigencia desde el 2009), China (2009), Corea del Sur (2011), Japón (2011), México (2011) y la Unión Europea (2012). Todavía es prematuro evaluar sus resultados. Se espera que los principales beneficiarios serán los productores agrícolas tecnificados y algunas ramas de la industria, como la textil. Los contratos sancionaron, en todo caso, el ingreso del Perú al patrón del libre comercio internacional y al modelo de economía de mercado, lo que quedó corroborado en el plano político con la inserción del país en la así llamada Alianza del Pacífico, formada conjuntamente en 2011 con los gobiernos de Chile, Colombia y México, que habían adoptado un modelo de política económica similar.

El nuevo gasto social del Estado:

El crecimiento económico aumentó los ingresos fiscales. Entre los años 2001 y 2006 estos casi se duplicaron, al crecer de 32 mil a 60 mil millones de soles, y desde el 2006 hasta el 2013 volvieron a duplicarse, alcanzando los 121 mil millones.¹⁴ Desde entonces se han estancado, como consecuencia de los altibajos de las exportaciones. Este incremento no fue el resultado de alguna reforma fiscal que transformase el sistema tributario, sino del crecimiento de la economía de exportación y de cierta mejora en la burocracia y el equipamiento informático de la oficina fiscal (la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, SUNAT, creada en los años noventa).

La holgura fiscal permitió replantear la relación del Estado con la población a través del gasto social. A lo largo del siglo XX el Estado había llegado a la población mediante la aplicación de programas de educación, salud y carreteras. A ello se añadían escuálidos servicios de seguridad interna y reparto de correspondencia y, muy ocasionalmente, programas de vivienda y dotación de servicios de electricidad y agua en las ciudades. Hasta los años setenta fue sobre todo la clase media quien aprovechó de estos servicios,

¹³ Alex Contreras, Zenón Quispe, Fernando Regalado y Martín Martínez, “Dolarización real en el Perú”. En *Estudios Económicos* N° 33; pp. 43-55. Lima: BCRP, 2017.

¹⁴ Claro que habría que descontar el efecto inflacionario acumulado desde el 2001, las estadísticas oficiales estiman la inflación en un acumulado del 33%.

lo cual era coherente con un sistema electoral que (hasta 1980) entregaba el derecho al voto solamente a quienes sabían leer y escribir en castellano. Desde los años noventa, pero con mayor fuerza desde el gobierno de Toledo, se desplegaron los programas de ayuda social “focalizados”, con el fin de entregarla a quienes verdaderamente eran los más necesitados: la población del sector de subsistencia. Para identificarla adecuadamente se levantaron Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHG), al tiempo que la radio se vio poblada de mensajes paternalistas en que las autoridades enseñaban a las madres cómo atender a los hijos, o los cuidados que debían tomar para preparar los alimentos.

Se diseñaron programas de construcción de infraestructura local (pozos de agua, caminos vecinales, lozas deportivas, mercados de abastos, escuelas o guarderías para niños), distribución de alimentos, e incluso, a partir de 2005, de entrega de pequeñas sumas de dinero en efectivo a las familias rurales con niños en edad escolar. Los problemas de “filtración” y “sub cobertura” han sido constantes en estos programas, por los defectos de las encuestas y el afán de la población de ingresar en ellos. Ser parte del sector de subsistencia no significa automáticamente ser pobre; más exactamente implica quedar fuera de la economía formal; vale decir, aquella cuyo dinero pasa por los bancos, los acuerdos se plasman por escrito y el Estado lleva un control de sus actividades a través de la regulación laboral y fiscal.

El Estado que antes arrancó tributos a los pobres y los reclutó a la fuerza para las minas o para, embutidos en un uniforme, conducirlos a la guerra, se presentaba ahora con una canasta de víveres y un cheque de cien soles para los buenos pobres que habían llevado a sus hijos a la escuela y a la posta médica. La idea de esta ayuda era también insertar a los campesinos en la economía de mercado. La disposición de dinero en sus bolsillos animaría a los comerciantes a llegar a los caseríos aislados, donde hasta entonces no había circulado la moneda ni habían asomado los maestros, enfermeros o las empresas constructoras de caminos. También debía animar a la población “no contactada” de la amazonía, a asimilarse a un Estado que entregaba ayudas a cambio de pasar por el aro de la civilización.

Las consecuencias del crecimiento y las perspectivas futuras

Las reformas que liberalizaron la economía en los años noventa, así como el auge exportador de 1993-2012 trajeron varias consecuencias, tanto para el sector exportador cuanto el de subsistencia. En el primero ocurrieron cambios entre la clase empresarial, desapareciendo o debilitándose los grupos más dependientes del subsidio de la abolida banca de fomento o de la protección de las aduanas. Otros, en cambio, resultaron fortalecidos, extendiendo sus intereses a la banca, algunos ámbitos de la industria, la construcción o la minería.¹⁵ El tamaño de la manufactura dentro del conjunto de la economía se mantuvo básicamente igual, en alrededor de un 15%, con una tendencia decreciente en los últimos años.¹⁶ Las industrias que lograron sobrevivir a la entrada de

¹⁵ Ver Francisco Durand, *El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva*. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007. Ver del mismo autor: *Los Romero, fe, fama y fortuna*. Lima: DESCO, El Virrey, 2013.

¹⁶ Al final del 2016 el peso de la manufactura dentro del PBI global llegó a un mínimo de 12.8%. Ver *Memoria Anual del Banco Central de Reserva del Perú 2016*, p. 197. Lima: 2017.

las importaciones, en los rubros textil, productos químicos y alimentos, se fortalecieron con el crecimiento del mercado interno. Para mediados de 2013 existían en el Perú 8 millones de tarjetas de crédito, una cifra impensable diez años atrás.¹⁷

El avance del sector de exportación llevó a que sea capaz de absorber a una parte del de subsistencia, principalmente a través del empleo asalariado, más que de la formalización de sus empresas. El crecimiento de la construcción en las grandes ciudades, debido al aumento del crédito para vivienda y el emprendimiento de grandes obras de infraestructura como el gaseoducto del sur o la carretera inter oceánica de Ilo a Iñapari (construida entre 2006-2010, con un total de 2600 kilómetros) demandó mano de obra que pudo ser surtida por los cuadros jóvenes y más calificados del sector de subsistencia. Hasta los años ochenta el sector exportador no abarcaba a más de un 15% del total demográfico, al punto que Hernando de Soto lo describió en un libro escrito hacia finales del siglo pasado, como un mundo artificial resguardado y, a su vez aislado, por una campana de vidrio.¹⁸

La resistencia al avance del sector exportador:

La expansión de las actividades mineras al compás del alza del precio de los metales, abrió nuevas avanzadas para el sector exportador en territorios hasta entonces no hollados por él. En las provincias altas del Cuzco, en las punas de la cordillera blanca en el departamento de Ancash, en el aislado departamento de Apurímac y en los páramos de Cajamarca, donde hasta entonces se había desenvuelto solo una rústica ganadería, florecieron importantes proyectos mineros que recordaban la marcha hacia el Oeste en las praderas norteamericanas del siglo XIX. Con las empresas mineras llegaban las carreteras asfaltadas, las construcciones de fierro y cemento, la electricidad, los empleos asalariados y los camiones de las mineras y los comerciantes. Una parte de los campesinos vendía de buen grado sus tierras e, introducido dentro de un overol, iniciaba su nueva vida de obrero del capitalismo. Pero estos eran los menos.

El resto observaba con recelo a los recién llegados y comprobaba, al poco, que junto con la carretera y la televisión, se instalaban también los comerciantes, las prostitutas, los delincuentes y los precios altos. La paz de la aldea campesina era rota por las explosiones de dinamita que traían cerros abajo y, una vez extraído de su seno el oro, volvía a ser reconstruido de una forma que más o menos recordaba su antigua forma. Pero el principal recelo campesino no era el ruido sino el agua. Esta nunca ha sido abundante en la costa y sierra peruanas. Las civilizaciones prehispánicas labraron canales entre laderas de granito para poder aprovechar el agua de las lagunas que formaban los deshielos de los grandes nevados en el verano. La crisis demográfica ocurrida con la conquista española, que literalmente diezmo a la población indígena, redujo la presión por el agua hasta los mediados del siglo XX, pero con una población de 30 millones de habitantes alcanzada en los inicios del siglo XXI, el agua se convirtió en un recurso escaso.

La minería moderna hace un uso intensivo de agua para el proceso de flotación y refinación. Las masas de mineral deben ser lavadas y transportadas usando agua, para

¹⁷ Ver diario *Gestión*, Lima, 21 de setiembre de 2013.

¹⁸ Hernando de Soto, *El misterio del capital. ¿Por qué el capitalismo triunfa en Occidente y fracasa en el resto del mundo?* Lima: El Comercio, 2000.

lo cual en los asentamientos mineros se construyeron enormes reservorios destinados a captar el agua de las lluvias y los deshielos de los nevados. Los conflictos entre campesinos y empresas mineras se multiplicaron desde 1999, cuando en la sierra de Piura, en una zona productora de limones, se desarrolló una fuerte oposición al inicio de la minería aurífera. Con la llegada del nuevo siglo los conflictos arreciaron en regiones como Cajamarca, Arequipa y el Cuzco, donde los campesinos, en algunos casos con el apoyo de las autoridades locales, se opusieron al inicio de proyectos mineros de gran envergadura como los de Conga y Tía María, impulsados por empresas de capitales internacionales.

El gobierno procedió a demandar mayores cuidados medio ambientales a las empresas, abriendo un Ministerio del Medio Ambiente en 2008, e intentó desactivar las protestas cediendo la mitad de la recaudación del impuesto a la renta pagado por las empresas extractivas a los gobiernos regionales y municipales donde se ubicaban los proyectos (los así llamados “canon” minero, petrolero o gasífero y que se ha extendido también a las actividades portuarias). Una cuota iba también para labores de investigación en las Universidades locales. Este esquema parece haber funcionado en algunas regiones, como Ancash y Moquegua, donde las empresas mineras, los campesinos y las autoridades locales han arribado a una convivencia pacífica, pero parece haber resultado insuficiente en las otras.

Con un objetivo similar y tratando de contener el fuerte carácter centralista del país, se implantó desde el 2002 un programa de descentralización, que convirtió los departamentos en “regiones”, los que elegirían a sus propias autoridades. Pero se trató de una descentralización bastante artificial, puesto que las cuentas fiscales no se descentralizaron, reteniendo Lima los impuestos más rendidores y el control de los proyectos de mayor envergadura, como los de la gran minería. De mayor impacto ha sido, en cambio la construcción de caminos rurales y el asfaltado de las carreteras en la región de la sierra, que hasta hace veinte o menos años, habían sido apenas trochas de tierra sin afirmar, en las que anualmente se llevaba a cabo una competencia de raid automovilístico conocida como “Caminos del Inca”. El acortamiento en tiempo y costo de los viajes, junto con un mayor número de camiones y autobuses y la difusión de la telefonía móvil han provocado una revolución en la sociedad rural, al aproximarla al comercio y mejorar su comunicación en general. Es difícil, por ahora, discernir el rumbo que tomará esta transformación, que para los más optimistas, podría ser eficaz para la disminución de la pobreza en esta parte del país.¹⁹

La emigración

Aunque resulte paradójico, entre las consecuencias del prolongado ciclo de crecimiento económico iniciado en los años noventa debe incluirse la emigración de los peruanos. Desde los años ochenta el Perú revirtió el saldo histórico de su flujo migratorio, que, aunque con números pequeños, había sido positivo desde el siglo de la conquista española. La crisis económica y el terrorismo propiciaron una salida de peruanos, que disminuyó en la década siguiente, haciendo pensar que se había tratado de un fenómeno coyuntural, que había remitido con la pacificación y la derrota de la inflación.

¹⁹ Richard Webb, *Conexión y despegue rural*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad San Martín de Porres, 2013.

Pero desde los primeros años del siglo XXI el flujo neto de emigrantes reavivó, alcanzando en ciertos años a sumar casi el uno por ciento de la población total.

El principal destino de salida siguió siendo los Estados Unidos, pero aparecieron varios otros nuevos, como los países vecinos (Chile y Argentina especialmente), España e Italia en Europa, y durante un tiempo Japón. Se trataría de un fenómeno propio de las economías que han iniciado una gran transformación de su economía, cuando el campo y los sectores tradicionales, que incluyen los antiguos empleos “seguros”, como las fuerzas armadas y policiales y el magisterio, ya no parecen capaces de asegurar el empleo de la población que tradicionalmente se dirigía a ellos, ni las expectativas de ascenso económico y social, que comenzaron a crecer en una economía que se iba mercantilizando aceleradamente.

Aunque la desigualdad se ha mantenido elevada, las dos décadas de crecimiento económico trajeron una importante reducción de la pobreza monetaria.²⁰ Para el año 2016 el Instituto Nacional de Estadística e Informática fijó en 21% la proporción de pobres; es decir, de personas cuyos ingresos no permiten cubrir la canasta de consumo considerada básica. Esta cantidad de pobres se concentra especialmente en la zona rural, donde afectaría al 44% de la población, mientras que en la zona urbana afectaría a solamente el 14%.²¹

Perspectivas futuras

La opinión de los analistas de la economía peruana acerca de su futuro se divide hoy en dos grandes grupos: de un lado, quienes señalan que el crecimiento de las últimas décadas ha descansado principalmente en la exportación de bienes primarios, concentrando las ganancias en una reducida porción de la población y desindustrializando al país. Se trataría de un crecimiento precario, por estar basado en una coyuntura de buenos precios en el mercado mundial y que, por lo mismo estaría condenado a terminar cuando dicha coyuntura llegue a su fin. Esta corriente sostiene que crecimientos de este tipo han sido típicos en la historia del Perú y no han provocado transformaciones duraderas que impulsen a un desarrollo más diversificado y sostenible en el tiempo.²²

De otro lado están quienes defienden la importancia de las reformas realizadas a partir de los años noventa, en el sentido de ordenar la macroeconomía del país, reduciendo la inflación, abriendo la economía al comercio mundial y desapareciendo las empresas públicas que distorsionaban los precios e inhibían el despliegue de la inversión privada.

²⁰ Sobre las distintas medidas de la desigualdad económica en el Perú de hoy, véase Waldo Mendoza, Janeth Leyva y José Luis Flor, “Distribución del ingreso en el Perú: 1980-2010”. En Janina León y Javier Iguíñiz, eds., *Desigualdad distributiva en el Perú: dimensiones*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2011; pp. 57-111.

²¹ Instituto Nacional de Estadística e Informática, *Informe Técnico: Evolución de la pobreza monetaria 2007-2016*. Lima: INEI, 2017.

²² Véase por ejemplo, Félix Jiménez; “Producto potencial, fuentes de crecimiento y productividad en la economía peruana (1950-2008). En *El Trimestre Económico* vol. LXXVIII: 4 (N° 312); pp. 917-940. México: 2011; del mismo autor: *La economía peruana del último medio siglo: ensayos de interpretación*. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 2010; Jürgen Schuldt, *¿Somos pobres porque somos ricos?: recursos naturales, tecnología y globalización*. Lima: Fondo Editorial del Congreso de la República, 2005.

Consideran que estas reformas, y no solo el ciclo de la economía mundial, explican el crecimiento de los últimos veinte años. Pero advierten que para continuar la expansión de la economía se requiere una nueva generación de reformas que apunte especialmente a elevar la productividad del trabajo (la cantidad de bienes producidos por cada jornada laboral), mejorar la educación pública, que es donde estudia el 80% de los jóvenes, y fortalecer la “institucionalidad” del país. Esto último significa, para esta corriente, hacer que ámbitos como el poder judicial, la policía y los partidos políticos se tornen actores serios y confiables, desterrando las grandes dosis de corrupción e ineficiencia que hasta hoy los han caracterizado.²³

En lo que, siguiendo diversas señales, podría ser el fin de un ciclo de bonanza exportadora, surgen en el Perú de hoy diversas preocupaciones, sea para prolongar por un tiempo más los años de las vacas gordas, facilitando las inversiones que permitan aprovechar los buenos precios que podrían acompañar por un tiempo más a los productos mineros, o para emprender las reformas que ayuden a diversificar las fuentes del crecimiento y lo vuelvan más equitativo y comprometido con el mercado interno, que para ello tiene que ser más robusto y con una mejor distribución de la riqueza.

La organización dual de la economía que hemos descrito al comienzo, se gestó durante la época colonial, cuando la crisis demográfica producida por la penetración europea dejó un mercado interno reducido y con una mano de obra escasa, que promovieron una orientación de la producción hacia la minería de metales preciosos para la exportación. La independencia no pudo cambiar este modelo, reduciéndose a diversificar los productos de exportación, que llegaron a ser bienes agrarios como el azúcar, las lanas o el algodón, silvícolas como el caucho y hasta de origen marítimo, como la harina de pescado. Tal vez el cambio más importante que ha ocurrido durante los dos siglos del régimen republicano haya sido que, junto con esta diversificación, sucedió una diversificación paralela de los mercados de nuestras exportaciones, que a partir del siglo XX incorporaron a la cuenca del Pacífico. Esto significó, sobre todo, un perfeccionamiento del modelo económico implantado en la temprana colonia, antes que una transformación, pero el crecimiento demográfico y de los ingresos alcanzados hasta hoy en el Perú, podría comenzar a inducir una cierta reorientación de nuestra economía de cara al futuro.

²³ Véase por ejemplo Piero Guezzi y José Gallardo, *Qué se puede hacer con el Perú. Ideas para sostener el crecimiento económico en el largo plazo*. Lima: Universidad del Pacífico y Fondo Editorial de la PUCP, 2013; Roxana Barrantes, Ricardo Cuenca y Jorge Morel, *Las posibilidades del desarrollo inclusivo. Dos historias regionales*. Lima: IEP, 2012.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE LOS PROFESORES DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

▪ Libros

Patricia Benavente, José Escaffi, José Távara y Alonso Segura

2017 Las Alianzas Público-Privadas (APP) en el Perú: Beneficios y Riesgos

Waldo Mendoza

2017 Macroeconomía Intermedia para América Latina. Tercera edición actualizada y Aumentada.

César Guadalupe, Juan León, José S. Rodríguez y Silvana Vargas

2017 Estado de la educación en el Perú, Análisis y perspectivas de la educación.

Adolfo Figueroa

2017 Economics of the Anthropocene Age. Palgrave Macmillan.

Adolfo Figueroa y Richard Web

2017 Distribución del ingreso en el Perú. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Alfredo Dammert y Raúl García

2017 *Economía de la energía*. Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Mario D. Tello

2017 La productividad total de factores agregada en el Perú. Nacional y Departamental. Lima, Instituto Nacional de Estadística e Informática.

Félix Jiménez

2017 *Veinticinco años de modernización neocolonial: Críticas de las políticas neoliberales en el Perú*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos.

Carlos Contreras y Elizabeth Hernández (editores)

2017 *Historia económica del norte peruano. Señoríos, haciendas y minas en el espacio regional*. Lima, Banco Central de Reserva del Perú e Instituto de Estudios Peruanos.

José Rodríguez y Pedro Francke (editores)

2017 *Exclusión e inclusión social en el Perú. Logros y desafíos para el desarrollo*. Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Iván Rivera

2017 *Principios de Macroeconomía. Un enfoque de sentido común*. Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ismael Muñoz, Marcial Blondet y Gonzalo Gamio (Editores).

2017 *Ética, agencia y desarrollo humano. V Conferencia de la Asociación Latinoamericana y del Caribe para el Desarrollo Humano y el Enfoque de Capacidades*. Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.

Waldo Mendoza y Janneth Leyva

2017 *La economía del VRAEM. Diagnósticos y opciones de política*. Lima, USAID-CIES.

Félix Jiménez

2017 *Macroeconomía. Enfoques y modelos*. Lima, Editorial Macro.

Máximo Vega-Centeno

2017 *Ética y deontología*. Lima, Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú.

▪ *Documentos de Trabajo*

No. 458 “Dependencias diversas: Los resultados económicos espacialmente diferenciados del desarrollo basado en recursos en el Perú 2001-2015”. José Carlos Orihuela, Victor Gamarra Echenique, Abril, 2018

No. 457 “Dinámica de inversión y competencia en generación eléctrica en un escenario de liberalización en el Perú: La importancia de los contratos de largo plazo”. Arnold Rivasplata R. y Raúl García C., Abril, 2018

No. 456 “Opportunism and Third-Party Influence on Long-Term Public Contracts”. Gonzalo Ruiz D, Abril, 2018

No. 455 “Mercado de trabajo doméstico en los inicios de la República: 1876 – 1940”. Cecilia Garavito, Abril, 2018

No. 454 “Capacidad productiva, cambio técnico y productividad: Estimaciones alternativas del producto de largo plazo”. Félix Jiménez, Marzo, 2018

No. 453 “Determinantes del poder de mercado en el sector regulado de las Microfinanzas Peruanas”. Giovanna Aguilar y Jhonatan Portilla, Marzo, 2018

No. 452 “Inmigración masiva, salarios reales y empleo: un modelo keynesiano”. Oscar Dancourt, Febrero, 2018

No. 451 “Dimensiones espaciales del crimen en Lima Metropolitana”. Javier Herrera Zuñiga y Carmen Armas Montalvo, Febrero, 2018

No. 450 “¿Qué hubiera pasado en 2014-2016 si..? Un modelo macroeconómico para el Perú”. Rodolfo Cermeño, Oscar Dancourt, Gustavo Ganiko y Waldo Mendoza, Enero, 2018.

- No. 449 “Derecho a la salud, cáncer y política fiscal en el Perú”. Pedro Francke, Enero 2018.
- No. 448 “Effect of the Juntos social program on female labor supply in Peru “. Luis García y Erika Collantes, Diciembre, 2017
- No. 447 “El derecho a la educación intercultural bilingüe y la política fiscal en Perú”. Luis García y Erika Collantes, Noviembre, 2017.
- No. 446 “Cambio técnico en el sector regulado de la microfinanzas peruanas: 2003-2015”. Giovanna Aguilar y Jhonatan Portilla. Octubre, 2017.
- No. 445 “Teaching Modern Macroeconomics in the Mundell-Fleming Language: The IS-MR-UIP-AD-AS Model”. Waldo Mendoza Bellido. Setiembre, 2017.
- No. 444 “La experiencia de la Banca de Desarrollo en el Perú: 1990-2015”. Oscar Dancourt Masías y Renzo Jiménez Sotelo. Agosto, 2017.
- No. 443 “Teaching Modern Macroeconomics in the Traditional Language: The IS-MR-AD-AS Model”. Waldo Mendoza Bellido. Julio, 2017.
- No. 442 “Has the Gender Wage Gap been Reduced during the ‘Peruvian Growth Miracle?’ A Distributional Approach”. Juan Manuel del Pozo Segura. Julio, 2017.
- No. 441 “Crecimiento y desindustrialización prematura en Perú. Un análisis Kaldoriano”. Félix Jiménez. Junio, 2017.
- No. 440 “La economía de PPK. Promesas y resultados: la distancia que los separa”. Waldo Mendoza Bellido y Erika Collantes Goicochea. Mayo, 2017.
- No. 439 “¿Es la educación un mecanismo de salida hacia mejores ocupaciones para las trabajadoras del hogar?” Cecilia Garavito. Mayo, 2017.

▪ *Materiales de Enseñanza*

- No. 3 “Economía Pública”. Roxana Barrantes, Silvana Manrique y Carla Glave . Marzo, 2018.
- No. 2 “Macroeconomía: Enfoques y modelos. Ejercicios resueltos”. Felix Jiménez. Marzo, 2016.
- No. 1 “Introducción a la teoría del Equilibrio General”. Alejandro Lugon. Octubre, 2015.

Departamento de Economía - Pontificia Universidad Católica del Perú
Av. Universitaria 1801, Lima 32 – Perú.
Telf. 626-2000 anexos 4950 - 4951
<http://departamento.pucp.edu.pe/economia/>